

Walther L. Bernecker

Democracia y superación del pasado: sobre el retorno de la memoria histórica reprimida en España

Desde la Guerra Civil española han pasado setenta años. Una vez acabada la era de Franco, el país consiguió con sorprendente rapidez la transición a la democracia. Durante el franquismo y también después, la Guerra Civil ha sido siempre un punto de referencia obligado en el discurso político e histórico. Casi nadie dejó de mencionarla como el punto de salida del régimen de Franco. Después de que durante décadas la historiografía sirviera a menudo para legitimar el régimen de los vencedores, a partir de 1975 hubo un verdadero *boom* de literatura sobre la Guerra Civil que satisfizo la necesidad de información y explicación entre gran parte de la población. Los historiadores y los periodistas habían estado siempre de acuerdo en que había que esperar hasta la democracia para poder analizar en profundidad la historia de la Guerra Civil y los años especialmente oscuros del franquismo temprano, sin el control y la censura del régimen.

Era de esperar que en la España democrática los aniversarios de la Guerra Civil se celebraran con mucha actividad para responder a la necesidad de información de los ciudadanos. Sin embargo, los aniversarios de 1976 y 1979 caían dentro de la época agitada de la transición y tanto los políticos como la sociedad civil tenían que concentrar todas sus energías en la tarea de pasar de la dictadura a la democracia. Una vez terminada esa tarea y con el PSOE en el gobierno desde 1982, el aniversario de 1986 brindaba por primera vez la oportunidad de conmemorar el principio de la guerra de cincuenta años antes en una España redemocratizada, sin tener que seguir las instrucciones ideológicas del Estado. Efectivamente, hubo algunos actos públicos que recordaron el principio de la guerra en 1986 (mientras que, en 1989, nadie parecía acordarse de su final), pero teniendo en cuenta la importancia que sigue teniendo esa guerra para la España actual, era sorprendente lo limitada que fue esa actividad conmemorativa. La mayoría de esos actos se habían traslada-

do al dominio «suavizado» de los historiadores, ya que los responsables políticos y científicos estaban de acuerdo en una cosa: no querían más justificaciones, sino explicaciones; que ya no hablasen más los abuelos que habían luchado en la guerra; ahora les tocaba a los jóvenes académicos que sólo la conocían a través de las fuentes y la literatura. En esos actos, se repetían una y otra vez las advertencias de que había que ser «objetivo» y argumentar con «distanciamiento histórico» porque el tema era un acontecimiento que había pasado hacía mucho tiempo y ya formaba parte de la «historia».

Los resultados de esos congresos y jornadas eran una gran cantidad de libros que dibujan una imagen bastante equilibrada de la Guerra Civil. Las revistas históricas (como *Historia 16*) y los periódicos de tirada alta (*El País*, etc.) publicaban numerosos artículos sobre el tema¹. Aparte de esas contribuciones historiográficas, la España «oficial» se quedaba prácticamente callada. Para el mes de junio de 1986, sólo unas pocas semanas antes de la fecha que marcaba el principio de la Guerra Civil, se habían convocado unas elecciones generales en las que el partido en el gobierno, el PSOE, tenía que defender la mayoría absoluta. En una situación tan delicada, no era recomendable desconcertar o incluso asustar a los votantes del centro y de la derecha moderada recordando públicamente la brecha que hubo en la sociedad española cincuenta años antes. En esa época, el Partido Socialista pertenecía claramente a la izquierda política. Además, se quería evitar iniciar un debate público sobre la parte de la responsabilidad que le correspondía al partido obrero más fuerte en el fracaso de la democracia de la Segunda República.

El único comunicado oficial desde el palacio de la Moncloa, pronunciado por el presidente Felipe González que hablaba como jefe de Gobierno de todos los españoles, no en su función de secretario general del PSOE, decía: «Una guerra civil no es un acontecimiento conmemorable, por más que para quienes la vivieron y sufrieron constituyera un episodio determinante en su propia trayectoria biográfica»².

¹ Cfr. los números monográficos sobre la Guerra Civil española de las siguientes revistas: *Cuenta y Razón* n.º 21, sep./dic. 1985; *Árbol* n.º 491/492, 1986; *Studia Histórica* n.º 4, Vol. III, 1985; *Letras de Deusto* Vol. 16, n.º 35, mayo/ago. 1986; *Aportes* n.º 8, junio 1988; para publicaciones de congresos, cfr. Aróstegui (1988); para recopilaciones, cfr. Tuñón de Lara (1986) y Tamames (1986).

² «“Una guerra civil no es un acontecimiento conmemorable”, afirma el Gobierno», en: *El País*, 19-VII-1986, p. 17.

Las afirmaciones de esta índole deben entenderse en el contexto de la reconstrucción de la democracia después de 1975 y de la palabra clave durante el «desmontaje» de la dictadura: el *consenso* en el que todos tienen que colaborar. Sin que se hubieran mencionado explícitamente, son seguramente las experiencias traumáticas de guerra civil, represión brutal y escisión social las que motivaban muchas de las actitudes y medidas durante la transición a la democracia: que los socialistas republicanos aceptasen la monarquía, que los comunistas moderasen sus exigencias, que todas las fuerzas políticas opuestas colaborasen para redactar la nueva Constitución. El objetivo era la construcción de la nueva democracia entre todos los bandos políticos, y no entre unos pocos en contra de la voluntad de los demás. Sin embargo, para conseguir ese objetivo hacía falta una reconciliación. No se trataba de cobrar todas las cuentas pendientes, sino de al menos poner punto final a las luchas y enemistades del pasado. Es posible que fuera este deseo de reconciliarse, en combinación con el miedo a que se abrieran las antiguas heridas no curadas, lo que motivó a los socialistas –unos de los grandes perdedores de la Guerra Civil, ahora en el Gobierno– a no sólo no reconocer oficialmente el 50º aniversario del principio de la guerra, sino incluso reprimirlo, y además, mostrar comprensión política hacia el antiguo «otro bando». Como se decía también en la declaración de la Moncloa: el Gobierno «quiere “honrar y enaltecer la memoria de todos los que, en todo tiempo, contribuyeron con su esfuerzo, y muchos de ellos con su vida, a la defensa de la libertad, y de la democracia en España”, y recuerda además “con respeto a quienes, desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente, a la que también muchos sacrificaron su propia existencia”. El Gobierno manifiesta su esperanza de que “nunca más, por ninguna razón, por ninguna causa, vuelva el espectro de la guerra y del odio a recorrer nuestro país, a ensombrecer nuestra conciencia, y a destruir nuestra libertad”».

Los socialistas que seguirían gobernando hasta 1996 recurrían a la herencia del miedo como consecuencia de la guerra para asegurar la precaución política y evitar tomar medidas radicales que pudiesen poner en peligro la estabilidad del sistema. Esa estabilidad conseguida con tanta rapidez después de 1975 tenía su precio político y moral: había que comprar la paz sociopolítica. Durante los años setenta y ochenta, gran parte de los militares mayores se seguían identificando con el pasado franquista. En esa época, en algunas publicaciones del ejército, las

imágenes de Franco seguían ocupando un lugar más importante que las de los legítimos estadistas democráticos. En los cuarteles se seguía hablando durante muchos años de la «cruzada», aunque diez años después de la muerte de Franco se tratara sólo de una minoría entre los militares. No obstante, la supervivencia de la simbología franquista seguía recordando que la reforma política que llevaría a la transición se basaba en un pacto elaborado dentro de las instituciones autoritarias. Y una parte de esa transición consistía en que las fuerzas armadas pasaran de la dictadura al postfranquismo sin ningún tipo de «limpieza».

El hecho de que no hubo ninguna ruptura clara entre la dictadura franquista y la democracia, oscurece aquellas áreas del pasado que se llaman «lugares de la memoria». La transición constituía cierto «pacto de honor» que compensaba la entrega del poder por parte de los franquistas mediante una amnesia colectiva, tanto por parte de los Gobiernos conservadores durante la transición de los años 1977 a 1982, como por parte del PSOE. Mediante esa negación de la historia, los socialistas continuaban con aquella pérdida de memoria a la que el régimen de Franco había obligado al pueblo español. En ambos casos, la marginalización y la represión de la historia servían para mantener las actuales relaciones de poder.

Durante todo el franquismo, el régimen se había empeñado mediante una consistente *damnatio historiae*, en erradicar cualquier memoria histórica que no se pudiera compaginar con la tradición del levantamiento del 17 y 18 de julio de 1936: físicamente, mediante el asesinato de las fuerzas republicanas; políticamente, mediante el reparto intransigente de poderes; intelectualmente, mediante censura y prohibiciones; propagandísticamente, mediante el adoctrinamiento partidista; y culturalmente, mediante la eliminación de los símbolos de aquella «Anti-España» que había obligado a rendirse incondicionalmente tras tres largos y duros años de lucha. A la destrucción del recuerdo de aquella España perdedora «del cincel y de la maza» (Antonio Machado) se unía pronto la necesidad de borrar de la memoria de la gente la huella de los propios crímenes. En un proceso de selección negativa controlado desde el centro del poder, se elegía todo aquello que había que eliminar de la memoria colectiva. Muy al contrario de esta actitud de los ganadores de la guerra, los Gobiernos de la transición no se empeñaban tanto en erradicar los símbolos del franquismo de los que varios se ven hasta hoy.

Otra razón importante por la que se había reprimido oficialmente el recuerdo de la Guerra Civil consiste en el consenso ideológico que dominaba en los años de la transición y el posterior despegue de la economía española que podría resumirse en los términos de modernización y europeización. Pero detrás de esa fe en el progreso, del consumismo extrovertido y del europeísmo desenfrenado existe un profundo complejo de inferioridad, precisamente en relación con ese progreso y esa Europa de la que el régimen franquista se había desacoplado conscientemente («España es diferente») y en sus últimos años se había mantenido alejada por razones políticas y económicas. Los filósofos, los escritores y los políticos españoles se preguntaban una y otra vez por las razones del «retraso» de su país, y durante muchos años, la ventaja en el desarrollo que Europa tenía frente a España era un tema recurrente en la prensa, literatura y filosofía. En el contexto de este debate, se considera la Guerra Civil como el acontecimiento histórico decisivo que puso punto final a una serie de intentos fallidos de modernización y por eso expresaba el retraso de España mejor que ningún otro.

La instauración del régimen franquista como consecuencia de la Guerra Civil provocó, después de 1945, la exclusión de España de la comunidad internacional de Estados, la proscripción y el boicót económico. De repente, el país dependía sólo de sí mismo. Durante muchos años, las relaciones internacionales se limitaban a los países árabes y América Latina, lo que a los españoles les causaba una sensación de subdesarrollo. Inferioridad, aislamiento y división entre vencedores y perdedores, todo ello se asociaba a la Guerra Civil y sus consecuencias. En los años setenta, la apertura del país a favor de la democracia, el progreso y la europeización significaban un paso adelante consciente para dejar atrás el pasado indeseado.

En los años ochenta, en casi todos los comentarios sobre la conciencia de la población española en relación con la Guerra Civil, se subrayaba la indiferencia de los jóvenes respecto al pasado reciente. Las instituciones oficiales mostraban una sorprendente falta de interés en cuanto a cambiar esa situación: el rey y el Gobierno preferían hablar de la reconciliación y de la entrada en Europa; una auténtica lluvia de publicidad hacía aumentar aún más el consumismo existente; todo el país estaba mentalmente preparado para la modernización y el progreso. El año 1986 marcó en España no sólo el cincuentenario del principio de la Guerra Civil, sino además la entrada del país en la Comunidad Europea

como miembro de pleno derecho, y la decisión final de permanecer en la OTAN. Si la Guerra Civil había significado (una vez más) el principio de una vía histórica especial para España, el año 1986, como muy tarde, representa la vuelta del país a la «normalidad» europea.

En parte, la negación de la historia entre las jóvenes generaciones seguramente tiene que ver con la instrumentalización de la historia por el régimen franquista durante tantas décadas, que en la España postfranquista se ha convertido en indiferencia o incluso rechazo. En este contexto, merecen ser mencionadas las reflexiones del filósofo José Luis L. Aranguren (1986), que decía que la sociedad española postfranquista ha iniciado una nueva relación con su historia en la que no se aceptan ya los dogmas, que la sociedad se está distanciando de su pasado (en vez de identificarse con él como antes), y que ha habido un cambio pronunciado en la memoria colectiva. Esa «mutación histórica» está relacionada con el peso de un «pueblo con historia universal» que anteriormente había ahogado a los españoles. Solían escuchar los sermones ortodoxos de la continuidad de la historia universal de España, de la que sólo unas pocas fuerzas heterodoxas conseguían distanciarse para volverse contra las dominantes fuerzas nostálgicas.

La cultura dominante en la España de principios de la Edad Moderna, durante el brillante Siglo de Oro de las artes españolas, era la de la Contrarreforma, y más adelante la de la antimodernidad. Como la época de grandeza de España en la historia universal coincidía en el tiempo con el auge cultural del catolicismo contrarreformista, se veía durante mucho tiempo una conexión indisoluble entre la cultura española y la resistencia contra las fuerzas de la modernidad. Prevalecía la mirada atrás con nostalgia hacia una España imperial y católica, a la que se le denominaba «España eterna» y «reserva espiritual de Occidente».

El franquismo, al menos durante sus primeros años, podría considerarse como el último intento de continuar esa tradición de la antimodernidad. Para el régimen, los elementos renovadores «revolucionarios» de la Falange —en sus orígenes fascistas— tenían menos importancia que los elementos tradicionalistas de proveniencia nacionalcatólica y militarista. En los últimos años del franquismo, y en especial después del auge económico de los años sesenta, esos elementos culturales «premodernos» se perdían rápidamente. Pero esa pérdida no causaba un antifranquismo explícito, sino más bien un «no franquismo», es decir, cierto escepticismo frente a la política, que sólo durante los primeros años des-

pués de la muerte del dictador conseguía convertirse en un compromiso político consciente, antes de recaer de nuevo, tras haber conseguido los objetivos principales de una transición pacífica —el aseguramiento de la democracia y el cambio del poder hacia el centro-izquierda del espectro político—, en el escepticismo distanciado inicial. En los años ochenta, no se divisaba ninguna alternativa política ni de derechas ni de izquierdas. Esta situación provocaba una sensación de parálisis que se reflejaba tanto en la conciencia política como en la histórica, fomentando una actitud que ya no tenía como objetivo la «diferencia», sino más bien la «indiferencia» y la «despolitización».

Partiendo de ese tipo de reflexiones, se revela la posibilidad de que haya una explicación mucho más sencilla que la político-ideológica, por la que se reprimía oficialmente el recuerdo de la Guerra Civil y se trataba con tanta dejadez el tema de los símbolos franquistas: puede plantearse la pregunta de si los valores difundidos por el franquismo realmente echaron raíces en la sociedad española, o si esos símbolos y toda la estética del régimen simplemente se toleraban con resignación, sin prestarles mucha atención, como meros síntomas superficiales. Como muy tarde a finales de los años cincuenta, la ideología del régimen —suponiendo que realmente hubiera existido alguna vez— entró en un proceso de disolución continua, y en los últimos años de la dictadura ya prácticamente había dejado de existir del todo. Es por eso que después de 1975 ya no hacía falta un debate forzado acerca de esa ideología y de los símbolos y las características externas del régimen franquista: de todas formas, ya sólo quedaban envoltorios huecos y vacíos que pocos tomaban en serio. De este modo se explica también por qué la sociedad española trataba con tanta indiferencia el pasado de la dictadura. Lo veía como algo que se había dejado atrás, digno de ser olvidado.

La Guerra Civil, y más aún los primeros años de la dictadura de Franco, se cubrían durante muchos años con un manto de silencio, al menos en lo que al discurso político se refiere. Probablemente, las generaciones de la democratización no consideraban como recomendable fijar la mirada en una época tan conflictiva. Debido a la importancia que el Estado le daba al progreso, el acto de recordar una época valorada como «negativa» aparecía como algo disfuncional. Sobre el altar de la mentalidad compensatoria se sacrificaban esos actos de conmemoración que muchos se esperaban del Gobierno tanto en 1986 y 1989 como también en 1996. Fueron sustituidos por el lema «¡Nunca más!» que

señalaba tranquilidad hacia ambos bandos. La Guerra Civil se valoraba como «tragedia» o como crisis que había provocado la destrucción de los valores de la convivencia. No se hablaba de las razones ni de las responsabilidades de la tragedia —es decir, de las intenciones de los insurgentes y sus cómplices de acabar con los logros democráticos—, sino solamente de las consecuencias de la «crisis trágica».

Algunos observadores interpretan el comportamiento oficial del Gobierno socialista en relación con los aniversarios de la guerra como el resultado de una estrategia preventiva bien pensada para consolidarse en el poder. Si esto fuera cierto, habría que preguntarse cómo se veía la Guerra Civil entre la población española de aquellos años. En el verano de 1983, el semanario *Cambio 16* organizó una encuesta representativa sobre este tema³. Según los resultados de dicha encuesta, el 59% de los entrevistados consideraban la Guerra Civil como un tema de interés, y el 57% afirmaban que era el acontecimiento histórico más importante para comprender la España actual. No obstante, el 76% se consideraba mal informado. Casi las tres cuartas partes (el 73%) veían la Guerra Civil como una época vergonzosa de la historia española que sería mejor olvidar. Exactamente la mitad de los entrevistados opinaban que ambos bandos luchaban por la libertad y el progreso, y hasta el 48% estaban de acuerdo con que el motivo detrás de las actuaciones de Franco era su gran amor por España. A la pregunta de si en ese momento tuvieran que decidirse por un bando u otro, ¿por cuál de ellos estarían dispuestos a luchar?, casi la mitad de los entrevistados (el 48%) contestaban que por ninguno.

Las respuestas a esta encuesta muestran el grado en el que la Guerra Civil ha forjado la conciencia de las generaciones posteriores, las que no la habían vivido directamente. En el momento de la encuesta, la gran mayoría de la población española la formaban personas que sólo habían vivido las consecuencias de la guerra, pero no la guerra misma. Y la arrolladora mayoría del 73% que consideraban esa época como vergonzosa y que sería mejor olvidarla, expresaban con esa opinión su interés en no mirar atrás hacia las viejas historias, sino, desde la perspectiva de un presente reconciliado, hacia delante, hacia un futuro europeo.

En 1995, a petición del Parlamento, el Gobierno español concedía la nacionalidad española a todos los miembros aún vivos de las Brigadas

³ *Cambio 16*, n.º 616-619, 26-IX/10-X-1983.

Internacionales. De este modo, casi sesenta años después del comienzo de la guerra, el ejecutivo de Madrid cumplía una promesa que había hecho el entonces jefe de Gobierno Juan Negrín durante los enfrentamientos en noviembre de 1938. Durante décadas, la dictadura franquista había impedido este acto, e incluso durante los largos años de la transición pacífica a la democracia, los políticos españoles no se acordaban de esa deuda pendiente de agradecimiento. Cuando por fin en 1995 la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales se dirigía a los partidos políticos con la invitación a tramitar la nacionalidad para los brigadistas, todos los grupos parlamentarios, por una vez, estaban de acuerdo con apoyar esta causa. Durante el debate parlamentario al respecto, se conmemoraba con palabras conmovedoras el esfuerzo desinteresado realizado por los internacionalistas; se hablaba de libertad, democracia, generosidad y lucha por los ideales. Uno de los argumentos a favor de concederles la nacionalidad era que los brigadistas deberían también poder llamar formalmente suyo el país que han llevado dentro del corazón durante toda la vida.

Asimismo, en el razonamiento de la moción se decía que casi sesenta años después del principio de la Guerra Civil y veinte después de iniciarse el proceso de democratización, ya había pasado el tiempo suficiente como para que todos los españoles amantes de la democracia y la libertad, desde la serenidad de la distancia histórica, pudieran mirar esta parte de su pasado que a lo largo de cuarenta años había sido una herida abierta. El hecho de que todas las fuerzas democráticas de España le brindaran este reconocimiento histórico a los interbrigadistas es una prueba extraordinaria tanto del deseo de los españoles de reconciliarse como de la convicción de los responsables políticos de que aquellos «voluntarios de la libertad» arriesgaron su vida por la democracia y la libertad en España y Europa.

No es tarea fácil estimar en qué grado había un consenso consciente detrás del «olvido» político durante la transición (1975-1982) y el Gobierno socialista (1982-1996). Lo que es evidente, sin embargo, es que durante los veinte años después de la muerte de Franco, las elites políticas de todos los colores mostraban una sorprendente discreción en cuanto a la superación del pasado (Bernecker 1998). Hasta hace pocos años, la amnistía general decretada al principio de la transición, iba acompañada por una amnesia política que impedía que la sociedad analizara en profundidad e integralmente el pasado. Algunos analistas

consideran esta falta como el mayor problema de la transición, que ha causado mucho daño a la cultura política del país. Otro indicador de la imperfección de la transición, según estos mismos analistas, es el tratamiento de los familiares de los republicanos desaparecidos durante la guerra. Mientras que el bando franquista identificó a sus muertos y los enterró con dignidad nada más terminar la guerra, hasta hoy no ha pasado lo mismo con los muertos republicanos. Algunas estimaciones afirman que hay hasta treinta mil muertos republicanos que siguen esperando ser exhumados de fosas comunes y ser entregados a sus respectivas familias. Durante veinticinco años, los familiares entregaban sin éxito sus solicitudes pertinentes a los diferentes Gobiernos democráticos, pero sólo en el año 2002, tras recurrir al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, empezaron a cambiar las cosas y se exhumaron los primeros cadáveres para darles un entierro digno. Y sólo a finales de ese mismo año, el Parlamento español aprobó una resolución que solicitaba al Gobierno que apoyase económicamente aquella búsqueda y reconociese oficialmente las víctimas políticas del franquismo como tales. Sin embargo, el Partido Popular que gobernaba en este momento evitó una vez más condenar explícitamente el golpe militar de 1936. Además, en la resolución se decía que el reconocimiento de las víctimas no podría utilizarse para abrir viejas heridas, es decir, que no se podría condenar los insurgentes de entonces.

Resulta evidente que estos fenómenos de ausencia analítica respecto al pasado se deben al espíritu de consenso de la transición. En 1975, no se realizó ninguna ruptura formal con el pasado. Es por eso que el antifranquismo no pudo utilizarse como mito fundador de la nueva democracia española, al contrario del caso de la *Resistenza* italiana. Ha tenido que pasar casi un cuarto de siglo para que el consenso social de la transición que en la práctica había convertido en un tabú los crímenes de los franquistas, pudiera romperse. Puede decirse que el análisis político del pasado franquista de España sólo ha sido una realidad en los últimos diez años aproximadamente.

Desde finales del siglo pasado, sin embargo, sí que hay muchos indicios de que la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, silenciada desde la transición, está volviendo del olvido⁴. Especialmente el problema de la superación del pasado ha cobrado mucha actualidad,

⁴ Cfr. Vilarós (1998), Resina (2000), Medina (2001); también Subirats (1993).

en concreto, la cuestión de si el proverbial «pacto de silencio» dentro del discurso político se basaba en una opinión colectiva o era impuesto por las elites políticas de la transición. En contra de las interpretaciones más críticas, el historiador madrileño Santos Juliá opinaba que la memoria histórica se ocultaba solamente en el ámbito político, pero nunca se llegó a borrar de la memoria colectiva. El «consenso del silencio», según él, era un producto de la sabia intención de no mezclar el debate político con la historia, abriendo el camino para un análisis más sobrio y equilibrado por parte de la historiografía (Juliá 1996 y 2002). En cambio, el politólogo Vicenç Navarro y otros historiadores y periodistas se quejan de la ausencia de una cultura de memoria oficial y una formación histórica crítica entre la población, hecho que para la legitimidad de la democracia podría representar incluso un peligro en potencia. Además, Navarro critica la tendencia generalizada de quitar importancia a los crímenes cometidos y equiparar los culpables con las víctimas al reducir, con intenciones dudosas, la lucha de ambos bandos al deseo de conseguir una España mejor (Navarro 2002).

Asimismo, la prensa diaria le está prestando mucha atención al hecho de que la represión franquista se está convirtiendo en el objetivo frecuente de congresos y publicaciones científicas⁵. En ese contexto, unos documentos recién encontrados han facilitado el descubrimiento de que el aparato represivo franquista funcionaba con una sistemática terrorífica que costó la vida a 140.000 personas y explotó a cientos de miles de republicanos en campos de trabajo⁶.

Una atención muy especial se está prestando también últimamente a los desaparecidos de la Guerra Civil, aquellas personas asesinadas más o menos sistemáticamente por los insurgentes especialmente en las primeras semanas de la guerra, uno de ellas el famoso escritor Federico García Lorca. En 1995, todavía bajo el Gobierno socialista, el Ministerio de Defensa de España había firmado un acuerdo con la fundación alemana Volksbund para un entierro digno en Pankovka, Rusia, de los 4.500 soldados españoles que habían muerto como miembros de la División Azul en la batalla de Leningrado. Como la mayor parte de

⁵ Cfr. la reseña recopilatoria en Bernecker (2003).

⁶ Son los resultados de un congreso celebrado en octubre de 2002 en el Museu d'Història de Catalunya de Barcelona. Cfr. Juliá (1999); Elordi (2003); Torres (2002^a y 2002^b); Casanova (2002); Serrano/Serrano (2002).

los gastos la aportaba Alemania, el Gobierno español tuvo que invertir sólo unos 130.000 euros hasta la primavera de 2003 para el entierro de los primeros 1.200 cadáveres. Desde entonces, se está pidiendo también ofrecer un tratamiento parecido a los alrededor de 30.000 desaparecidos republicanos. Sin embargo, el conservador Partido Popular, cuyo Gobierno disfrutaba entre 2000 y 2004 de la mayoría absoluta, se reveló una vez más como el guardián del legado franquista y rechazó varias veces tanto la condena pública del golpe militar como el apoyo económico a las exhumaciones⁷. Y aunque en noviembre de 2002, el Parlamento español acordó por fin la condena unánime a la dictadura franquista y prometió el apoyo económico a los familiares de los republicanos asesinados, para abrir las fosas comunes y hacer posible un entierro digno, el Gobierno se negó posteriormente a facilitar los recursos solicitados.

Ante el continuo rechazo por parte del Gobierno, en otoño de 2000 una iniciativa cívica del pueblo Priaranza del Bierzo, en el norte de Castilla, decidió actuar por su cuenta. Apoyados por arqueólogos profesionales, realizaron la exhumación de los cadáveres de trece desaparecidos durante la Guerra Civil. Las amplias reacciones públicas a las exhumaciones de Castilla y León llevaron a la creación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) así como a plataformas parecidas con presencia en Internet⁸. El fundador de la ARMH es el periodista Emilio Silva que estaba buscando a su propio abuelo desaparecido (Silva 2005). Desde entonces, dicha asociación lucha por la aclaración de los asesinatos políticos y las ejecuciones masivas de los seguidores de la República, que los insurgentes habían cometido durante la Guerra Civil. Sin embargo, teniendo en cuenta el gran número de muertos sin identificar, la asociación no dispone de los recursos económicos suficientes para tantas exhumaciones.

Es posible que en la medida en la que la sociedad española recupere la memoria reprimida de las víctimas y perdedores de la Guerra Civil se

⁷ En febrero de 2002, por ejemplo, el Partido Popular frustró un proyecto de ley de los demás partidos sobre la rehabilitación e indemnización de las víctimas del franquismo. Y cuando en octubre del mismo año, el partido de la oposición Izquierda Unida presentó una «proposición no de ley» para conseguir el reconocimiento de los presos políticos que estaban obligados a realizar trabajos forzados, los llamados «esclavos del franquismo», el PP apoyó la proposición, pero rechazó una vez más la indemnización económica.

⁸ ARMH: <<http://www.geocities.com/priaranza36/>>; *despage*: <<http://www.nodo50.org/despage/>>.

llegue a un consenso entre todos los partidos políticos. Los diferentes esfuerzos de recuperar ese pasado «prohibido» o conscientemente reprimido representan a la vez un paso decisivo hacia una «normalización» de la conciencia histórica, es decir, hacia la compensación y el mutuo acercamiento de las disparidades que siguen existiendo en la memoria colectiva. Con un retraso de sesenta o setenta años, se vislumbra ahora la «superación» pública del peor trauma de la reciente historia de España que, sin embargo, llega demasiado tarde para muchos de los que lo tuvieron que vivir.

Con el reciente «descubrimiento» —en el sentido de la palabra— de los crímenes cometidos en nombre del régimen franquista desde el inicio de la Guerra Civil, acaba de comenzar la confrontación pública con un pasado que, desde la perspectiva de la historiografía especializada, apenas ya escondía secretos desde hacía tiempo. El gran público, sin embargo, está ahora pisando un terreno nuevo que debido a la larga época de imponderabilidad política se había evitado conscientemente. Pero la importancia de este proceso no se encuentra en el nivel público, sino en el individual. Las consecuencias jurídicas de las violaciones del derecho humano durante la dictadura siguen estando pendientes, pero si se escuchan las voces de aquellos que perdieron algún familiar que sigue desaparecido hasta hoy, el objetivo no es ni la venganza ni la revancha, sino la aclaración y el simbolismo. A la mayoría de los afectados parece bastarles el reconocimiento público de las injusticias cometidas mediante la aclaración realizada por el Estado democrático, para poder hacer la paz con el pasado reciente. Lo que aún es difícil de prever es qué tipo de dinámica puede desarrollar y qué dimensiones puede llegar a tener este proceso de enfrentamiento con los capítulos más oscuros de la historia contemporánea, especialmente si se tiene en cuenta que cada vez hay menos representantes de la generación de los testigos de la época.

A pesar de que el tratamiento crítico del reciente pasado de España no ha sido un tema muy común entre el gran público hasta hace muy poco, sí que ha habido siempre unas áreas parciales o marginales de la vida pública en las que la memoria de la guerra y la dictadura ha estado siempre presente. Principalmente, se trata del cine y más aún de la literatura que incluso mucho antes del fin del régimen franquista se dedicaban a contrastar el discurso de propaganda oficial con imágenes

subversivas y alternativas de la realidad española⁹. A partir de 1975, la Guerra Civil y el franquismo no tardaron en convertirse en «lugares de la memoria» (Pierre Nora). Entre muchos otros habría que destacar especialmente a Manuel Vázquez Montalbán, Antonio Muñoz Molina, Rafael Chirbes, Manuel Rivas, Juan Manuel de Prada así como últimamente también Andrés Trapiello, Dulce Chacón y Javier Cercas¹⁰. Algunas de sus obras se han convertido en películas¹¹.

Un efecto comparable al de las novelas y películas lo tenían también los documentales y exposiciones históricas sobre la represión política, el exilio y la resistencia de los maquis que, junto al reanimado interés de los historiadores, han conseguido que el tema de la superación del pasado está más presente que nunca en el debate público.

Acerca de la relación entre el análisis público de la represión franquista y la historiografía sobre la Guerra Civil, hay que destacar la tesis de Santos Juliá. Como es sabido, este historiador rechaza la opinión de que hubiese habido un «pacto de silencio» en España, y afirma que la memoria ha estado siempre presente en el discurso público. Según él, fue precisamente la memoria la que mediante su continua advertencia dio el impulsivo decisivo para la negociación de la amnistía durante la

⁹ Cfr., por ejemplo, Herzberger (1995); para el tratamiento de la Guerra Civil y la dictadura en cine y televisión en España, cfr. el artículo ampliamente documentado de Rey (2003).

¹⁰ Cfr. (una breve selección) Antonio Muñoz Molina, *Beatus Ille*, Madrid 1985; id., *Sefarad. Novela de novelas*, Madrid 2001; Fernando Díaz-Plaja, *El desfile de la victoria*, Madrid 1976; Jesús Torbado, *En el día de hoy*, Barcelona 1979; Manuel Vázquez Montalbán, *El pianista*, Barcelona 1985; Rafael Chirbes, *La larga marcha*, Barcelona 1996; Juan Manuel de Prada, *Las máscaras del héroe*, Madrid 1996; Manuel Rivas, *El lápiz del carpintero*, Madrid 1998; id., *¿Qué me quieres, amor?*, Madrid 1996; Andrés Trapiello, *La noche de los cuatro caminos: una historia del maquis, Madrid 1945*, Madrid 2001; Javier Cercas, *Soldados de Salamina*, Barcelona 2001; Dulce Chacón, *La voz dormida*, Madrid 2002; Jesús Ferrero, *Las trece rosas*, Madrid 2003; para el tratamiento novelístico de la transición, cfr. Cebrián (2003).

¹¹ Por ejemplo, *Soldados de Salamina* (2002) dirigida por David Trueba. Véase también el libro sobre el rodaje de la película: Javier Cercas y David Trueba, *Diálogos de Salamina, un paseo por el cine y la literatura*. Madrid: Tusquets, 2003. Cfr. también la película del director Montxo Armendáriz *Silencio roto* (2001) sobre los maquis durante la posguerra y el documental *La guerrilla de la memoria* (2002, producida por Montxo Armendáriz y dirigida por Javier Corcuera), con entrevistas a algunos maquis que han sobrevivido. Otro planteamiento similar con conversaciones con supervivientes se encuentra en el documental *Los niños de Rusia* de Jaime Camino (2001).

primera fase de la transición, e hizo posible aquel olvido «sano» que evitó que se utilizara la Guerra Civil como argumento en el concurso político. Juliá remite a los antecedentes intelectuales de la transición cuando las fuerzas moderadas dentro y fuera del régimen ya se habían acercado mucho antes de la muerte del dictador para preparar mentalmente el posterior discurso de reconciliación. El indicador más claro de este proceso era el paulatino cambio en el significado de la Guerra Civil que —una vez liberado de su carga ideológica y las mutuas culpaciones— se llegaría a considerar como una desgracia colectiva con responsabilidades compartidas por ambos bandos. Según esta argumentación, las actuales exigencias de recuperar la memoria no se deben al rechazo del (inexistente) «pacto de silencio», sino a la rotura del consenso de la memoria de la transición que implicaba un reparto proporcionado de la culpabilidad (Juliá 2002).

Esta última observación puede demostrarse empíricamente. Es cierto que las publicaciones de los últimos diez años prestan más atención que antes a la ilegitimidad del golpe militar de 1936 y a la represión sistemática del bando franquista. La represión durante la guerra y la posguerra se ha convertido prácticamente en una nueva rama de la historiografía. Y en el lado opuesto, los pensadores conservadores están también tomando posiciones: autores como Pío Moa o César Vidal que suelen cargar casi toda la responsabilidad de la guerra en la izquierda, han tenido varios éxitos de ventas con sus publicaciones de los últimos años¹². Es manifiesto que la relativa homogeneidad de interpretación de antaño se ha convertido de nuevo en una discrepancia acentuada.

La sorprendente importancia que se ha ganado en estos últimos años la concienciación social acerca de la represión franquista del pasado se debe al Gobierno del conservador Partido Popular bajo José María Aznar entre 1996 y 2004. Desde un principio, este Gobierno se comportaba en cuestiones históricas e histórico-políticas como el administrador del legado franquista. Cuando la oposición propuso que en 1999, con ocasión del 60º aniversario del final de la guerra, se homenajeara la memoria de los exiliados y se apartaran fondos para su indemnización, el partido gobernante rechazó la proposición, presuntamente porque el texto contenía una condena del golpe militar de 1936. En los años siguientes, el PP seguía insistiendo en que la Guerra Civil era una fase superada de

¹² Cfr., por ejemplo, Moa (1999, 2004^a, 2004^b) y Vidal (2003).

la historia de España. Tan sólo durante los cuatro años del segundo mandato de Aznar, el Gobierno rechazó más de 25 iniciativas parlamentarias con objetivos similares. En la sociedad civil, sin embargo, esa actitud del Gobierno provocaba cada vez más actividad, casi siempre con el apoyo de los partidos de la oposición, como puede verse, por ejemplo, en la creación de la mencionada Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Hasta el final del Gobierno de Aznar, el ejecutivo obstaculizaba prácticamente cualquier trabajo acerca de la memoria histórica al considerar que implicaba una condena de los crímenes franquistas, pero con el inesperado cambio de Gobierno en marzo de 2004, tras los atentados de los terroristas islamistas en Madrid, ha cambiado la situación. El Gobierno del nuevo presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero decidió constituir una comisión interministerial de investigación para hacer posibles propuestas acerca de la «rehabilitación moral y jurídica» de las víctimas de la represión.

Bibliografía

- ARANGUREN, José Luis L. (1986): «Por qué nunca más», en: Tamames, Ramón (ed.), *La guerra civil española*, pp. 171-184.
- ARÓSTEGUI, Julio (ed.) (1988): *Historia y memoria de la Guerra Civil. Encuentro en Castilla y León, Salamanca, 24-27 de septiembre de 1986*. 3 Vols. Valladolid: Junta de Castilla y León.
- BERNECKER, Walther L. (1998): «Zum Umgang mit ungeliebter Vergangenheit. Die spanische Gesellschaft und die Erinnerung an den Bürgerkrieg von 1936», en: Weber, Jürgen/Piazolo, Michael (eds.), *Justiz im Zwielicht. Ihre Rolle in Diktaturen und die Antwort des Rechtsstaates*. München: Olzog, pp. 111-130.
- (2003): «Entre la historia y la memoria: Segunda República, Guerra Civil española y primer franquismo», en: *Iberoamericana* n.º 11, pp. 227-238.
- CASANOVA, Julián (ed.) (2002): *Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco*. Barcelona: Crítica.
- CEBRIÁN, Juan Luis (2003): *Francomoribundia*. Madrid: Alfaguara.
- ELORDI, Carlos (ed.) (2003): *Los años difíciles. El testimonio de los protagonistas anónimos de la Guerra Civil y la posguerra*. Madrid: Punto de Lectura.
- HERZBERGER, David (1995): *Narrating the Past. Fiction and Historiography in Postwar Spain*. Durham/London: Duke University Press.
- JULIÁ DÍAZ, Santos (1996): «Raíces y legado de la transición», en: Juliá Díaz, Santos/Pradera, Javier/Prieto, Joaquín (eds.), *Memoria de la transición*, pp. 679-682.
- (2002): «Echar al olvido. Memoria y amnistía en la transición», en: *Claves* n.º 129, pp. 14-24.
- (ed.) (1999): *Víctimas de la guerra civil*. Madrid: Temas de Hoy.

- JULIÁ, Santos/PRADERA, Javier/PRIETO, Joaquín (eds.) (1996): *Memoria de la transición*. Madrid: Taurus.
- MEDINA DOMÍNGUEZ, Alberto (2001): *Exorcismos de la memoria. Políticas y poéticas de la melancolía en la España de la transición*. Madrid: Ediciones Libertarias/Produhfi.
- MOA, Pío (1999): *Los orígenes de la Guerra Civil española*. Madrid: Encuentro.
- (3ª2004ª): *Los mitos de la Guerra Civil*. Madrid: La Esfera de los Libros.
- (5ª2004ª): *Los crímenes de la Guerra Civil y otras polémicas*. Madrid: La Esfera de los Libros.
- NAVARRO, Vicenç (2002): *Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país*. Barcelona: Anagrama.
- RESINA, Joan Ramón (ed.) (2000): *Disremembering the Dictatorship. The Politics of Memory in the Spanish Transition to Democracy*. Amsterdam: Rodopi.
- REY, David (2003): «Die Franco-Ära in der medialen Geschichtskultur Spaniens. Bürgerkrieg und Diktatur in Kino und Fernsehen seit 1975», en: *Jahrbuch für Europäische Geschichte*, Vol. 4, pp. 113-160.
- SERRANO, Rodolfo/SERRANO, Daniel (3ª2002): *Toda España era una cárcel. Memoria de los presos del franquismo*. Madrid: Aguilar.
- SILVA, Emilio (2005): *Las fosas de Franco. Crónica de un desagravio*. Madrid: Temas de Hoy.
- SUBIRATS, Eduardo (1993): *Después de la lluvia: Sobre la ambigua modernidad española*. Madrid: Temas de Hoy.
- TAMAMES, Ramón (ed.) (1986): *La guerra civil española. Una reflexión moral 50 años después*. Barcelona: Planeta.
- TORRES, Rafael (2002ª): *Desaparecidos de la guerra de España (1936-?)*. Madrid: La Esfera de los Libros.
- (2002ª): *Víctimas de la victoria*. Madrid: Anaya.
- TUÑÓN DE LARA, Manuel (1986): *La guerra civil española. 50 años después*. Cerdeña: Labor.
- VIDAL, César (2ª2003): *Checas de Madrid. Las cárceles republicanas al descubierto*. Barcelona: Belacqua.
- VILARÓS, Teresa M. (1998): *El mono del desencanto: una crítica cultural de la transición española (1973-1993)*. Madrid: Siglo XXI.